

43ª SESION ORDINARIA DEL 18 DE AGOSTO DE 1884

Presidencia del Dr. Ruiz de los Llanos

SUMARIO — *Asuntos éntrados.* — *Se acuerda permiso á la Comision de Inmigracion, Colonizacion y Tierras Públicas para retirar su despacho sobre revalidacion de títulos á los poseedores de tierras en la Pampa y Patagonia.* — *Aprobacion del dictámen de la Comision de Peticiones en la solicitud de doña Encarnacion S. de Saenz pidiendo pension.* — *Aprobacion del dictámen de la misma Comision en la solicitud del Teniente Coronel don Saturnino Beron, pidiendo una subvencion para la publicacion de su obra titulada: «El servicio de Estado Mayor.»* — *Rechazo del dictámen de la Comision de Guerra y Marina en la solicitud de doña Máxima G. de Hayes pidiendo pension.* — *Aprobacion del dictámen de la Comision de Obras Públicas en el proyecto de ley, en revision, mandando hacer estudios para la construccion de un camino carretero de San Juan á Villa Argentina.* — *Aprobacion del dictámen de la Comision de Peticiones en el proyecto de ley exonerando de los impuestos de Contribucion Directa y Patentes á la fábrica de tejidos de lana establecida en la Capital por don Adrian Prat.* — *Consideracion del dictámen de la Comision de Tierras Públicas en el proyecto de ley disponiendo la mensura de tierras en la Pampa para ser distribuidas en lotes á los ciudadanos pobres.*

PRESENTES

Presidente En Buenos Aires, á diez y ocho de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, reunidos en su Sala de sesiones los señores diputados anotados al margen, el señor Presidente declara abierta la sesion.

ACTA

Arigós Se lee y aprueba la de la sesion anterior.

ASUNTOS ENTRADOS

COMUNICACIONES OFICIALES

Bustos El Poder Ejecutivo Nacional.

Cáceres Buenos Aires, Agosto 2 de 1884.

Calvo A la Honorable Cámara de Diputados.

Cárcano El Poder Ejecutivo tiene el honor

Castro

Civit

Corvalan

Costa

Crespo

Darquier

De la Fuente

Dantas

Demaria

Fernandez

Figueroa (F. C.)

Figueroa (F. J.)

Funes

Gallo (D.)

Gil

Gilbert

Gorostiaga

de acusar recibo á la nota de esa Honorable Cámara fecha 25 del ppdo., solicitando informes relativos á los estudios y presupuestos, á que se refiere la ley número 1825 de 24 de Setiembre de 1883, sobre construccion de diques para represar el agua en las provincias de la Rioja y Catamarca.

El Poder Ejecutivo manifiesta á V. H., en respuesta, que dichos estudios han sido retardados, por no disponer el Departamento de Ingenieros del personal necesario para llevarlos á cabo; pero en la actualidad el Ingeniero Dubourg cuenta con todos los elementos para continuar los estudios de los dos diques, uno en las inmediaciones

Gomez (E.)
Herrera
Lainez
Lahitte
Leguizamon (O.)
Malbran
Navarro Viola
Ocampo
Olmedo
Ortiz
Paz (M.)
Paz (E. N.)
Peña
Perez
Posse (F.)
Puebla
Pujol Vedoya
Quintana
Roca
Rodriguez
Serú
Solá
Solari
Solveyra
Sosa
Taglie
Teran
Vega
Villamayor
Yofre
Zavalía
Zavalla
Zeballos

nes de la ciudad de la Rioja y otro en Marlarzan.

En cuanto al de Catamarca, el ingeniero Werning se halla tambien en actitud de proceder sin demora á la verificacion de los estudios en aquella provincia.

Dios guarde á V. H.

JULIO A. ROCA.

BERNARDO DE IRIGOYEN.

(Al Archivo.)

El Poder Ejecutivo Nacional.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1884.

Al Honorable Congreso de la Nacion.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de elevar á la consideracion de V. H. la adjunta nota de la Sociedad de Beneficencia de la Capital, solicitando la jubilacion de doña Ciriaca Pimentel, como empleada de la Casa de Huérfanas de la Merced.

No estando en las atribuciones del Poder Ejecutivo acordar la jubilacion solicitada, se permite presentar á la consideracion de V. H. dicha solicitud.

Dios guarde á V. H.

JULIO A. ROCA.

BERNARDO DE IRIGOYEN.

(A la Comision de Peticiones).

AUSENTES CON LICENCIA

Alvear
Araoz
Beltran
Febre
Gomez (F. M.)
Posse (E.)
Romero
Solier
Videla
Iramain

El Presidente del Senado remite en revision un proyecto acordando á don Manuel Gentil la subvencion de ochenta pesos nacionales por tres años, á objeto de que establezca una fábrica de tejidos de seda.

(A la Comision de Hacienda).

El mismo remite en revision un proyecto sancionado por esa Cámara, acordando quinientos pesos á la señora Margarita Gauna de Morales, por una sola vez, en calidad de gracia por servicios y auxilios dados en la guerra de la Independencia por su finado padre el teniente coronel don Calisto R. Gauna.

(A la Comision de Guerra).

CON AVISO

Benítez
Coquet
Dávila
Güemes
Leguizamon (L.)
Palacio

El mismo remite en revision el proyecto de ley sancionado por esa Cámara aumentando á cuarenta pesos la pension que disfruta doña Luisa R.

Arauz, viuda del teniente 1º del cuerpo de inválidos don N. Arauz.

(A la Comision de Guerra).

— El mismo devuelve, modificado, el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo para invertir hasta cincuenta mil pesos moneda corriente en la construccion de un edificio destinado á las oficinas públicas nacionales en la ciudad de San Luis.

(A la Comision de Obras Públicas).

— El mismo remite, en revision, un proyecto de ley por el cual se autoriza el gasto de ochenta mil pesos nacionales en la construccion de Oficinas para Correos y Telégrafos, Comisaria de Guerra y Asilo de Inmigrantes en el pueblo de Bahía Blanca.

(A la Comision de Obras Públicas).

— El mismo envía, en revision, un proyecto por el cual se manda liquidar y pagar á D. Martin G. Güemes la pension vitalicia de cuatrocientos pesos fuertes, que corresponde á su finado padre D. Martin Güemes.

(A la Comision de Guerra).

— El mismo envía, en revision, un proyecto de ley acordando á la señora Corina C. de Brown, permiso para residir en Montevideo por el término de un año.

(A la Comision de Guerra).

— El mismo envía, en revision, un proyecto por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo para que invierta treinta mil pesos nacionales, en la construccion de un edificio destinado para la administracion de correos y telégrafos en la ciudad de Santa-Fé.

(A la Comision de Obras Públicas).

DESPACHO DE LAS COMISIONES

La Comision de Obras Públicas se ha espedido en la solicitud de los Sres. D'Abreu y C^a. sobre construccion de un ferro-carril de Bahía Blanca á Villa Mercedes.

— La misma, en el proyecto del Senado sobre construccion de una casa de Correos en el Rosario.

— La de Peticiones, en las solicitudes del Sargento Villamonte, de doña Gertrudis M. de Rojo y de doña Flora S. de Fisher.

— La de Guerra en la de doña Antonia M. Jáuregui y Aurora Orellos.

— La Comision Auxiliar de Presupuesto en el crédito suplementario al Departamento de Justicia Culto é Instruccion Pública por once mil cuatrocientos diez y ocho pesos, ochenta y cuatro centavos.

Sr. Presidente.—Se imprimirán y repartirán para formar la órden del día correspondiente.

PETICIONES PARTICULARES

Don Juan Cruveillier propone la construccion de pozos artesianos.

(A la Comision de Peticiones).

— La señora Catalina White solicita pension graciable en mérito de los servicios prestados al pais por su finado

padre D. Guillermo White, como organizador del armamento naval en 1814.

(A la Comision de Guerra).

— La Conferencia de Copacabana (Córdoba) pide que el Congreso contribuya con una suma para la edificación del Colegio práctico de sirvientas que sostiene.

(A la Comision de Instrucción Pública).

— D. Angel Ferrari solicita se subvencione á la empresa del Teatro Colon.

(A la Comision de Peticiones).

— D. Fernando Caballero solicita se le acuerde una subvencion para continuar sus estudios musicales en Europa.

(A la Comision de Peticiones).

— La preceptora Doña Feliciano M. de Bureau, solicita jubilacion.

(A la Comision de Peticiones).

— Doña Eloisa A. de Surffern, viuda del comisario de Policia D. Agustin Surffern, solicita pension graciable.

(A la Comision de Peticiones).

— La señorita Elena Gazcon solicita pension graciable como nieta de un guerrero de la Independencia.

(A la Comision de Guerra).

Sr. Presidente—No hay mas asuntos entrados.

TIERRAS PÚBLICAS EN LA PAMPA Y PATAGONIA

Sr. Calvo—Pido la palabra.

El segundo asunto de la órden del dia núm. 25, que es un proyecto de la Comision de Inmigracion y Colonizacion, fué suspendido por corto tiempo á peticion de la misma Comision.

En ese transcurso los pobladores de Patagonias han constituido aquí sus apoderados que los representan, y como la Comision ha modificado completamente sus vistas, viene á pedir á la Cámara le permita retirar su despacho, para presentarlo despues con mejores datos.

Suficientemente apoyada la indicacion se vota y es aprobada.

ORDEN DEL DIA

Sr. Presidente—Se va á pasar á la órden del dia.

PENSIONES

(ENCARNACION S. DE SAENZ)

Comision de Peticiones.

A la Honorable Cámara de Diputados

La Comision de Peticiones ha tomado en consideracion la solicitud de doña Encarnacion S. de Saenz, pidiendo pension, y por las razones que dará el miembro informante, tiene el honor de aconsejar á V. H. la aprobacion del siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º Acuérdase á doña Encarnacion S. de Saenz la viudedad de sesenta pesos mensuales, en mérito de los ser-

vicios prestados por su finado esposo D. Miguel Saenz ex-guarda 2º del Resguardo de la Aduana de la Capital.

Art. 2º Mientras esta suma no incluya en el Presupuesto, se abonará de rentas generales, imputándose á la presente ley.

Art. 3º Comuníquese al P. E.

Sala de Comisiones, Julio 15 de 1884.

J. Arigos — F. J. Figueroa — D. T. Perez.

Sr. Presidente—Está en discusion en general.

Sr. Arigós—Pido la palabra.

La señora Encarnacion S. de Saenz se presenta solicitando una pension en mérito de los servicios prestados por su finado esposo D. Miguel Saenz, ex-guarda segundo del Resguardo de la Aduana de la Capital.

La solicitante remite los documentos que justifican esos servicios, despues de haberlos pedido oficialmente al Ministerio de Hacienda.

En esos documentos hay tres informes, uno espedido por el señor Administrador de Aduana, otro por el Jefe del Resguardo y otro por la Alcaldia.

Estos informes, señor Presidente, estan todos de acuerdo en reconocer los servicios prestados con honradez, laboriosidad y esmero por este empleado.

Fué empleado de la Aduana de la Capital desde el año 1862 hasta el año 1884, es decir, ha servido veintidos años.

El señor Amadeo dice que los servicios que este empleado prestó en los veintidos años, fueron continuados sin interrupcion ninguna, revelando competencia, laboriosidad y honradez, y mereciendo de sus superiores respeto y estimacion.

El Jefe del Resguardo, en su informe, dice:

Mientras este señor desempeñó su empleo, observó una conducta irreprochable, dando ejemplo de contraccion y de honradez á sus compañeros.

El señor Alcaide, en su informe reitera todas estas observaciones que abonan en favor de este empleado.

El señor Saenz faltó al desempeño de su deber unos pocos dias, á consecuencia de una enfermedad que contrajo en campaña, donde su conducta fué tambien ejemplar.

Consta, además, que el señor Saenz contrajo esta enfermedad militando en el ejército de Levalle, como ayudante Mayor.

La Comision al iniciarse este asunto, encontró en su cartera una peticion del señor Administrador de Aduana, fechada en 11 de Agosto de 1882, solicitando la jubilacion de este empleado por su avanzada edad.

Debó hacer presente á la Honorable Cámara que cuando el señor Saenz se hallaba enfermo, puso en su reemplazo un empleado sustituto en la Aduana, al que le entregaba

Sr. Presidente.—Invito á la Cámara á pasar á cuarto intermedio.

Así se hace.

Vueltos á sus asientos los señores diputados, continúa la sesion bajo la presidencia del vice-presidente 1º, señor Serú.

DISTRIBUCION DE TIERRAS NACIONALES

Comision de Tierras Públicas.

A la Honorable Cámara de Diputados.

La Comision de Inmigracion, Colonizacion, etc., ha tomado en consideracion el proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo en Julio 11 del corriente año, disponiendo la mensura de tierras en la Pampa, para ser distribuidas en lotes á los ciudadanos pobres; y por las razones que dará á V. H. el miembro informante, tiene el honor de aconsejarlos le preste su vuestra aprobacion, con las modificaciones que se expresan á continuacion:

1ª Sustituir en el artículo 4º las palabras «En el centro de las secciones» por las de: «En el local mas conveniente de las secciones, etc.»

2ª Modificar el principio del inciso 1º del artículo 6º, como sigue: «El solicitante debe ser mayor de 22 años, etc.»

3ª En el inciso 4º del mismo artículo, cambiar las palabras «50 hectáreas» por las de: «diez hectáreas», y las de «300 árboles» por «doscientos árboles.»

4ª En el artículo 7º poner: «inciso 3º del artículo anterior,» donde dice: «inciso anterior»

5ª Cambiar, en el artículo 8º, las palabras «seis meses» por las de «un año.»

6ª Modificar, como sigue, el principio del artículo 11: — «Art. 11. Si se descubriesen hasta un año despues de otorgado el título de propiedad, actos ejecutados para eludir las disposiciones de esta ley, el Poder Ejecutivo declarará, etc.»

7ª Suprimir el artículo 13 del proyecto.

8ª El final del artículo 14 (13 de la Comision), modificarlo como sigue: «abonando quinientos pesos por la tierra.»

Sala de la Comision, Julio 28 de 1884:

*F. C. Figueroa — N. A. Calvo —
Aureliano Argentó — D. G. de
la Fuente.*

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Art. 1º De las tierras nacionales que deben ser medidas con arreglo á la ley de 3 de Noviembre de 1882, el Poder Ejecutivo dispondrá se destinen á los efectos de la presente y en terrenos que no sean indicados para la Agricultura, veinte fracciones compuestas de 50 leguas de 2500 hectáreas.

Art. 2º Estas secciones serán ubicadas en terrenos propios para pastoreo, provistos de agüadas permanentes, ó en los que sea fácil la estraccion de agua, por aparejos ó medios comunes.

Art. 3º Cada seccion será dividida en 200 lotes de 625 hectáreas, debiendo darse á ellos, en cuanto lo permitan los accidentes del terreno, 2500 metros de frente por 2500 de fondo,

Art. 4º En las ubicaciones sobre rios ó arroyos, el frente de los lotes podrá disminuirse, á fin de favorecer el mayor número posible. En este caso se estenderá el fondo para que todos encierren el área determinada.

En el centro de las secciones se reservarán ocho lotes para las necesidades futuras de la colonizacion agrícola, y para pueblos.

Art. 5º Los agrimensores observarán, al practicar las mensuras, lo establecido en el título 1º de la ley de 3 de Noviembre de 1882, en todo lo que no esté en oposicion con las disposiciones de la presente.

Art. 6º El Poder Ejecutivo concederá la posesion de un lote á todo ciudadano ó extranjero que tenga carta de ciudadanía y lo solicite bajo las siguientes condiciones:

1ª El solicitante debe ser jefe de familia, mayor de 22 años, y no poseerá bienes raíces en la República.

2ª Debe pedir la tierra para su exclusivo uso y beneficio, y no para favorecer á terceras personas.

3ª Aceptará la obligacion de ocupar directamente el terreno durante cinco años continuos, residiendo en él, levantando una habitacion ó introduciendo haciendas que representen por lo menos un capital de doscientos cincuenta pesos moneda nacional.

4ª Se obligará igualmente á labrar por lo ménos en los cinco años 50 hectáreas, y á plantar y cultivar 300 árboles en el lugar mas conveniente.

Art. 7º El Poder Ejecutivo, al reglamentar la presente ley, fijará para los efectos del inciso anterior el valor de los ganados, segun la seccion en que deban introducirse.

Art. 8º Los ganados deberán introducirse, en el término de seis meses de otorgada la concesion, acreditándose la propiedad de ellos, y si vencido este plazo no se hubiera justificado el cumplimiento de esta obligacion, se considerará decaído el derecho, pudiendo concederse el terreno á otro solicitante.

Art. 9º Las tierras acordadas con arreglo á esta ley no estan sujetas á ejecuciones ni á embargos provenientes de deudas contraídas por el poseedor, antes ni durante los cinco años de la posesion.

Art. 10 Será tambien nula, durante ese plazo, toda cesion de derechos, promesa de venta, hipoteca y demas actos tendentes á enagenar ó gravar los terrenos á que se refiere esta ley, así como los documentos en que se declare haber poseído por cuenta de un tercero.

Art. 11 Si se descubriesen actos ejecutados para eludir las disposiciones de esta ley, el P. E. en cualquier tiempo declarará revocado el derecho acordado, volviendo la tierra con todo lo edificado y plantado en ella al dominio de la Nacion.

Art. 12 Vencido el plazo establecido en el artículo 6º, se estenderá el título definitivo de propiedad debiendo justificar previamente el concesionario, en la forma que establezca el Poder Ejecutivo, haber sido cumplidas fielmente todas las condiciones que le fueron impuestas.

Art. 13 Al solicitar la escritura de propiedad, el poseedor obligará el importe de la mensura de su lote, que se fija desde ahora en seis centavos por hectárea para los territorios de la Pampa y Patagonia y ocho centavos para el Chaco,

Art. 14 Si el poseedor, despues de haber cumplido durante dos años las obligaciones de poblacion establecidas en el artículo 6º, quisiese obtener anticipadamente la propiedad del lote ocupado, tendrá derecho á que se le escribire, abonando quinientos pesos moneda nacional por la tierra y.... por gastos de mensura.

Art. 15 Quedan subsistentes las disposiciones contenidas en la ley de 3 de Noviembre de 1882 que no esten en contradiccion con la presente.

Art. 16 Los gastos autorizados por esta ley se imputarán al producido de la venta de tierra pública.

Art. 17 Comuniquese al P. E.

IRIGOYEN.

(El Mensaje del Poder Ejecutivo se encuentra en la página 408 de este libro.)

Sr. Presidente.—Está en discusion en general.

Sr. Figueroa (F. C.).—Pido la palabra.

La Comision de Inmigracion ha estudiado el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y ha encontrado no solo que es conveniente, sino que encierra un acto de estricta justicia y de prevision patriótica por parte del gobierno.

La ley que se proyecta viene á complementar, puede decirse, las demas que ya hemos dictado sobre colonizacion, venta de tierras, etc., completando, diré así, un sistema agrario al respecto.

La ley que se proyecta no es una novedad, ella está calcada en una ley análoga que existe en los Estados Unidos y que se llama la ley del hogar (*Homestead*).

El año 1852 uno de los partidos en que está dividida la opinion en aquel país, puso como un lema en su bandera el principio de que «las tierras públicas de los Estados Unidos pertenecen al pueblo y que no deben ser vendidas á individuos, ni concedidas á compañías, sino que deben ser consideradas como un depósito sagrado para beneficio del pueblo, y que deben ser concedidas en porciones limitadas, libres de costo, á pobladores que no sean propietarios de tierras».

Este programa, diré así, de ese partido, se convirtió en proyecto de ley en las Cámaras, el año 1859, y fué rechazado.

Al año siguiente pasó por una pequeña mayoría y el Poder Ejecutivo lo vetó. Al fin en 1862 se convirtió en ley poniéndole el cúmplase el gran presidente de aquella Nacion, señor Lincoln.

Posteriormente, el señor Jhonson en un mensaje que pasó al Congreso, el año 65, dijo respecto de esa ley estas palabras: «El sistema del hogar fué establecido solo despues de larga y ardorosa resistencia. La esperiencia ha venido á demostrar su sabiduria. Las tierras en manos de industriuosos pobladores, cuyo trabajo crea riqueza y contribuye

á los recursos públicos, valen mas para los Estados Unidos que si hubiesen sido reservadas en completa soledad para futuros compradores».

Esta ley tampoco es una invencion de los Estados Unidos: ella existe en nuestra legislacion, pues todas las leyes del título 12, R. de Indias determinan la forma y modo como debia darse la tierra á los españoles, sin perjudicar por ello á los indígenas, de una manera bastante completa y benéfica; si esas leyes no han tenido aplicacion, ha sido debido á los malos administradores que tenia en ese tiempo la colonia.

Esta ley podemos pues implantarla en la República con mas ventaja que en los Estados Unidos, y quizá habiendo otras razones que no existen allí.

Se sabe, señor presidente, que es nuestro gaucho el que ha contribuido á la par del soldado de línea á defender las fronteras; es el que ha estado abandonando su hogar para ocurrir adonde el Gobierno Nacional lo mandara y por último son ellos los soldados que hemos tenido en la guerra de la Independencia y de consiguiente es un acto de estricta justicia, como he dicho antes, el que la tierra pública, que por otra parte podemos decir como en los Estados-Unidos, es del pueblo de la República, sea distribuida entre aquellas personas que han contribuido con su sangre y su trabajo, no solo á su conquista sino á asegurarla evitando nuevamente que cayera en poder de los salvajes.

No se puede decir que en esto hay una liberalidad exagerada, puesto que la concesion que se hace no es mayor que la que hemos hecho á los inmigrantes, tanto por la ley de colonizacion, como por la de venta de tierras públicas.

Uno de los artículos de la ley de colonizacion dispone que se anticipe los pasajes á los colonos, que se les dé semillas, útiles de labranza y mantencion hasta la cantidad de mil nacionales, pagándola en cinco anualidades despues de tres años; con lo que se demuestra la importancia que nosotros damos á la poblacion.

Entonces, pues, es un beneficio que se hace, dando esta tierra á los ciudadanos en virtud de los servicios prestados, ó, aunque ella pudiera aplicarse á otros que no esten en tales condiciones, sin embargo, venimos á establecer una condicion importante para nosotros: es la condicion de ciudadanía que impone esta ley y las otras que por la misma se establece.

En los Estados Unidos la tierra pública siempre se ha dado á los ciudadanos, y este principio tiene tantas raices allí, que hoy mismo el partido republicano, al levantar la

candidatura del señor Blaine, ha inscrito en su bandera de principios el de que la tierra pública debe reservarse para los ciudadanos; y aunque este principio es ley allí, quiere decir que se debe tomar todas las medidas precaucionales para evitar que se pueda adulterar.

Nosotros hemos sido muy liberales con los extranjeros, á tal grado, que no hemos hecho nada, se puede decir, por imponerles la ciudadanía. Sería, pues, un medio el que demos la tierra á todos aquellos que quieran poblarla con la condicion de que se hagan ciudadanos. Así, no solo habremos dado mayor número de ciudadanos á la República, vinculando á los extranjeros á nuestros intereses, á nuestros propósitos, á nuestros destinos, sino que por este hecho no vendrá tampoco á perjudicarse en nada la poblacion, y para ello bastaria citar ligeramente lo que ha sucedido con esta ley en los Estados Unidos.

El año 41 fué la primera vez que se dictó la ley que prescribía que la tierra pública no se diera sino á ciudadanos, y en esa fecha los Estados-Unidos solo tenían diez y siete millones de habitantes, el año 50 tenían veinte y tres millones ciento noventa y un mil ochocientos setenta y seis, y los inmigrantes europeos entrados en los diez años fueron un millon setecientos trece mil doscientos cincuenta y uno.

El año de 1860, la poblacion era de treinta y un millones cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos veinte y uno, y los extranjeros entrados fueron en el decenio, dos millones quinientos noventa y seis mil setecientos siete.

En 1870, poblacion: treinta y ocho millones quinientos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y uno; extranjeros entrados en el decenio, dos millones trescientos veinte y seis mil doscientos setenta y dos.

En 1880, la poblacion constaba de cincuenta millones ciento cincuenta y cinco mil setecientos ochenta y tres, y los extranjeros llegados en el último decenio á los Estados-Unidos, habian sido tres millones seis mil doscientos cuarenta y cinco.

Y aunque el Censo de los Estados-Unidos no consigna cuantos son los ciudadanos naturalizados, hay en ellos, tomando por ejemplo los cinco estados agrícolas que ocupan la zona central al Oeste del Estado de Ohio, á saber, Indiana, Illinois, Missouri, Kansas y Colorado, se puede estimar que del millon ciento sesenta y tres mil seiscientos ochenta y siete ciudadanos agricultores, quinientos mil son naturalizados. De modo, que tres cuartas partes de los agricultores europeos venidos á esos estados, se han hecho ciudadanos para ponerse en estado de adquirir la tierra.

Se ve, pues, como esta condicion impuesta

de ser ciudadano, no es un obstáculo para el engrandecimiento de la poblacion en los Estados-Unidos, ni tampoco ha sido un obstáculo para la venta de la tierra pública, pues, desde 1787 hasta 1841, época en que se dictó la ley, es decir, en cincuenta y cuatro años, la suma producida por la venta de tierra pública, fué de ciento diez millones de pesos fuertes, y desde 1841 hasta 1880, esto es, en los treinta y nueve años siguientes, el producido fué de veinte millones, sin contar el valor de cincuenta y cinco millones seiscientos sesenta y siete mil cuarenta y cuatro acres dados gratuitamente en los diez y ocho años que llevaba de ejercicio la ley del hogar.

Por este hecho, señor Presidente, se ve que en los Estados-Unidos esto no ha sido una rémora para la inmigracion, como no puede tampoco serlo en nuestro país, donde está perfectamente asegurada la paz, donde hay estensísimos y feraces territorios y un clima benigno, como sucede en esta República.

Hay otra circunstancia mas, que debe tenerse en cuenta para apreciar las ventajas de esta ley, y es que, de esta manera, podremos ponernos á cubierto de cualquier emergencia que pudiera sobrevenir.

Y á este respecto, tenemos el ejemplo de lo que ha sucedido en Méjico con sus pobladores extranjeros de las fronteras.

Nosotros, que tambien tenemos frontera con Chile y con el Brasil, debemos hacer que la tierra pública se enagene á los ciudadanos, porque solamente de esta manera nos veremos libres del peligro que entraña como, segun el señor Dominguez, sucedió en Méjico: que se vieron en la dolorosa necesidad de perder enormes extensiones de fertilísimas tierras, que fueron invadidas, primero por el poblador americano y, despues, por el conquistador extranjero; hecho que dió origen á la ley que proscribía que en la frontera terrestre pudiera enagenarse tierra á extranjeros, sin previo permiso, hasta veinte leguas de distancia, y en la marítima, hasta cinco.

Aparte de esta consideracion, el Poder Ejecutivo dice perfectamente en su mensaje: «si se considera la estension del territorio de la Patagonia, calculada en treinta mil leguas cuadradas, y la del Chaco en diez ó doce mil, se reconocerá la conveniencia de destinar mil leguas, ó sea un dos por ciento de esos desiertos, á la instalacion de tres mil ochocientos ciudadanos, padres de familia, que llevarán á esos lugares solicitarios su trabajo, sus intereses y las esperanzas que en medio de los esfuerzos y conflictos recordados, cifraron probablemente algun dia en el porvenir y justicia de la Nacion».

Ademas, hay que tener presente, señor

Presidente, que la mayor parte de los hombres de campo no tienen hogar, son inquilinos ó arrendatarios de los grandes propietarios de tierra, y no es posible que cuando todo el mundo duplica sus capitales, cuando se siente este bienestar general en el país, esta fraccion desheredada no tenga hogar propio.

Por medio de este proyecto venimos á dárselo y á hacer tambien que los beneficios de la paz y de la riqueza pública puedan entenderse hasta esa agrupacion de ciudadanos que es, sin duda, la mas necesitada.

He dicho.

Varios Diputados—Muy bien.

— Se pone á votacion el despacho en discusion, y resulta aprobado.

— En discusion el artículo 1.º.

Sr. Ortiz—Pido la palabra.

Desearia saber del señor miembro informante de la Comision, si esta ley se refiere únicamente á los territorios de la Pampa, ó si comprende tambien los del Chaco.

Sr. Figueroa (F. C.)—Esta ley se refiere á los territorios destinados al pastoreo, que son casi puede decirse los de la pampa, porque hay ciertas tierras que no se pueden destinar á la agricultura, por estar distantes de los entrepoblados, costas, vias férreas etc.

Sr. Ortiz—Pero ¿la ley se refiere á los del Chaco?

Declaro, con franqueza, que no conozco el alcance de la ley de Noviembre de 1882.

Sr. Figueroa (F. C.)—Se refiere á los de la Pampa.

Sr. Argentó—Se refiere á todos los territorios nacionales.

Sr. Ministro del Interior—La mente del Poder Ejecutivo ha sido comprender, en este artículo, á todos los territorios nacionales, con escepcion del de Misiones que está destinado para la agricultura.

De manera, pues, que en esta ley está comprendido el territorio de la Pampa, el de Patagones y el del Chaco.

Sr. Ortiz—Pido la palabra.

No voy á oponerme de ninguna manera, á la sancion de una ley, como esta, que la considero muy benéfica para el país.

Pero entiendo que debe establecerse un artículo en ella que tienda á salvaguardar ciertos derechos, ya sean de las provincias, ya sean de los habitantes de las mismas.

Es sabido que los límites de los territorios de las provincias no están todavia establecidos por el Congreso, y por esta razon puede suscitarse el conflicto siguiente:

Las provincias de Santiago, Santa Fé y Salta, por ejemplo, ejercen jurisdiccion hasta cierto punto en esos territorios; y la han ejercido de distinto modo.

Así, ha sucedido que han medido tierras, que han vendido en remate y que los compradores las poseen.

Supóngase el caso, señor Presidente, de que el Poder Ejecutivo Nacional, ya sea por ignorancia, ya sea porque considere á la Nacion con derecho á esos territorios, haga una concesion, con arreglo á esta ley, de territorios poseidos por las provincias ó por sus habitantes, es decir, de territorios vendidos en remate por algunas de estas provincias.

¿Como debe entenderse esta ley?

¿Cual es el derecho que debe prevalecer en este caso?

¿El de las provincias ó el de la Nacion?

El conflicto es muy probable, y en mi entender, no puede resolverse con facilidad, ni en un sentido ni en otro, al menos de una manera definitiva.

Para establecer que la tierra que el Poder Ejecutivo Nacional considere de propiedad de la Nacion y en consecuencia de esta ley, la acuerda á los ciudadanos que se la soliciten, sería necesario ante todo, oír á las provincias, conocer previamente sus títulos, sus hechos de posesion, en una palabra, conocer sus derechos á esos territorios, porque, de otro modo, no podria el Congreso resolver de una manera arbitraria esta cuestion.

Y establecer que ellas pertenecen á las provincias es algo que tampoco se puede resolver por la misma ignorancia de esos derechos y de los que respectan al Gobierno Nacional.

He tomado la palabra al discutirse el artículo 1.º, porque no conocia el alcance de la ley de 3 de Noviembre de 1882.

Y termino proponiendo á la Comision y al señor Ministro, que se establezca un artículo en este proyecto, en el que se diga que todos los territorios disputados entre la Nacion y las provincias, no serán concedidos, en virtud de esta ley, hasta tanto el Congreso no dicte la ley de límites.

Me parece que esto no perjudica ni á las provincias ni á la Nacion.

Sr. Figueroa (F. C.)—La ley que se proyecta, señor Presidente, no puede referirse sino á aquellos territorios no disputados por las provincias.

Anteriormente habia un proyecto de ley que se pidió que volviera á Comision, en el que se determinaba lo que se haria con aquellos territorios poseidos por particulares.

De manera que esta ley no va á perjudicar á los que posean las tierras, ni habla de las disputadas.

Si el señor Ministro declara que el Poder Ejecutivo entiende que la ubicacion no se ha de entender á los territorios que fueran disputados, creo que no sería necesario introducir un artículo mas, porque entonces quedaria

consagrada en las actas la verdadera naturaleza de la ley.

Sr. Ministro del Interior—Pido la palabra.

Sin hacer la declaracion que el señor diputado me pide, (porque tiene mas alcance de lo que á primera vista quizá le parece) puedo asegurarle que su observacion no tiene en este momento razon de ser.

No tratamos ahora la cuestion de la delimitacion entre los territorios nacionales y los territorios de las provincias. Esta es una cuestion enteramente distinta de la que en este momento tiene á su consideracion la Cámara.

Tratamos simplemente de facultar al Gobierno para distribuir entre los habitantes pobres de la campaña, lotes pequeños de tierras en los territorios nacionales.

El señor diputado debe comprender que el Poder Ejecutivo, que no tiene interés alguno en desconocer los derechos de las provincias, ni en perjudicar sus intereses, no mandará medir estas áreas precisamente en aquellos lugares que puedan ser motivo de cuestion entre las autoridades de las provincias y de la Nacion.

Esta seguridad es la única que puedo dar al señor diputado, sin que me sea permitido aceptar la reserva en la forma en que él la propone.

Yo no admito, señor Presidente, que las provincias puedan tener disputas de territorio con la Nacion.

Este es un caso que, me parece, no puede llegar nunca correctamente.

La Nacion tiene la facultad de determinar los límites de las provincias; el Congreso inviste á este respecto una autoridad soberana, una autoridad incondicional. Y si bien es muy natural que, cuando trate de ejercitar esa facultad, atienda á las consideraciones de posesion, á las consideraciones que los señores diputados, puedan invocar mas tarde, cuando tratemos la cuestion, no me parece, sin embargo, que esto importe poder decir que pueda suscitarse cuestion entre provincias y la Nacion, sobre territorios.

Pueden existir dudas, ó mas bien representarse todo aquello que las provincias consideran conveniente á su derecho; pero la cuestion no puede existir, porque el juez para resolverlas es el Congreso.

Pienso, pues, que anticipáramos innecesariamente la discusion de un punto que es quizá mas grave de lo que á primera vista parece; y que basta la declaracion que acabo de hacer, de que el Poder Ejecutivo, procediendo discretamente, no ha de ordenar que se trace estas secciones en lugares que sean todavia motivo de duda ó de incertidumbre, para que el señor diputado acepte el artículo tal como está propuesto.

Sr. Ortiz—Pido la palabra.

Haciendo honor, señor Presidente, á las buenas intenciones del Poder Ejecutivo, habia pedido al señor Ministro que simplemente manifestase si estaba ó nó de acuerdo con el señor miembro informante de la Comision y conmigo, sobre este punto. Parece que el señor Ministro encuentra alguna dificultad en hacer esa declaracion, porque considera que tiene mayor alcance.

Por consiguiente, el hecho legal está perfectamente constatado: el Poder Ejecutivo no lo hará, si no lo cree conveniente, pero lo hará si lo cree conveniente y si lo cree justo.

Quiere decir, entonces, que los conflictos á nacer dependen de la simple voluntad del Poder Ejecutivo, voluntad ilustrada, lejitima, sin duda, pero, en fin, dependen de su voluntad.

No estoy del todo conforme, señor Presidente, con las teorías ligeramente reseñadas por el señor Ministro, en virtud de las cuales cree él poder hacer estas reservas sin ningun perjuicio para las provincias.

El dice: no hay posibilidad de discusion de límites entre las provincias y la Nacion, porque hay un juez para resolver.

Precisamente porque hay posibilidad de conflictos, es que hay un juez para resolver; porque á no haber esa posibilidad, no habria juez.

Pero ¿quién es el juez? ¿El Poder Ejecutivo solo? Indudablemente nó. El juez es el Gobierno, el Congreso, diremos así, en virtud de la Constitucion.

Es pues como juez que debemos precaver la cuestion, que no quiero suscitar, sino simplemente precaver.

Y digo al juez: ¿como entiende esta ley que dicta? ¿La entiende de manera á facultar al Poder Ejecutivo para que ubique esas secciones donde mejor le parezca y lo encuentre conveniente, aun en medio de los departamentos de una provincia por ejemplo?

Un señor Diputado—No!

Sr. Ortiz—Permítame el señor diputado; el señor Ministro dice que no hay posibilidad de cuestion, porque él entiende que el Gobierno Nacional resuelve todo.

Sr. Ministro del Interior—No, señor!

No he dicho tal cosa y si la hubiese dicho la rectifico.

He dicho que no comprendo la posibilidad de cuestiones entre la Nacion y las provincias, porque está ya establecido el poder que constitucionalmente, debe decidir toda duda. Ese poder es el Congreso.

Sr. Ortiz—Precisamente, como ese poder es el Congreso, y como el Congreso trata de dictar una ley que es un poco ambigua en sus términos, que puede traer algunos conflic-

tos, es que yo proponia una medida que, me parece, en ningun caso afectaria la ley ni los intereses de la Nacion.

Simplemente, decia yo esto: que mientras el Congreso no resuelva la cuestion de límites, es decir, mientras el juez no pronuncie su fallo, ó no haga la simple manifestacion de voluntad, como quiere el señor Ministro, de decir, por ejemplo:—La division de límites entre Santa-Fé, Santiago y Córdoba es de tal á tal punto,—no debemos ponernos en el caso de un conflicto, muy posible y muy probable, y que se ha de producir tal vez muy pronto.

Conflicto en el sentido constitucional, se entiende.

Y voy á hacer referencia á este asunto.

En el proyecto del Poder Ejecutivo sobre territorios federales, se viene á especializar ya mas esta cuestion: se viene ya fijando límites que, por ejemplo, toman á Santa-Fé parte del territorio á que cree tener derecho, lo mismo á Santiago y á Salta.

Entonces, ve el señor Ministro que el conflicto está encima; va á producirse dentro de muy pocos dias, en la misma Cámara.

Sr. Figueroa (F. C.)—Pero no en virtud de esta ley.

Son los territorios nacionales que deben ser medidos con arreglo á la ley del 82, los que van á servir para los fines de esta ley; y eso nada tiene que ver con el proyecto de ley á que el señor diputado se acaba de referir.

No puede, pues, existir en esto los conflictos que el señor diputado teme.

Sr. Ortiz—Pero supongamos que hoy, mañana ó pasado, suceda que el Poder Ejecutivo mande medir un territorio sobre el cual una provincia cree tener derecho...

Sr. Ministro del Interior—No es posible el caso que el señor diputado pone, porque la ley terminantemente dice: «en los territorios nacionales».

Sr. Ortiz—Pero si no se sabe hasta donde alcanzan los territorios nacionales.

Sr. Ministro del Interior—Es otra cosa que vamos á discutir mas tarde; y,—aunque no temo que haya los conflictos que prevé el señor diputado,—ese seria el momento en que podria hacer valer sus observaciones.

Pero permítame esto ¿podria existir duda de que los territorios al Sud del Rio Negro, al Sud de los límites señalados por la ley del año 78, son nacionales?

Sr. Ortiz—No, señor; porque está resuelta la cuestion por esa ley.

Sr. Ministro del Interior—¿Podria existir duda de que los territorios en el Chaco, sobre la márgen del Paraná, son nacionales?

Absolutamente, nó.

Sr. Ortiz—En la parte no disputada, nó.

Sr. Ministro del Interior—Si no hay disputa!

Sr. Ortiz—No sé.

Pero estiéndase hasta Santiago y Salta. ¿Podria haber duda respecto de la márgen izquierda del rio Salado?

Sr. Ministro del Interior—La discrecion del Poder Ejecutivo le aconseja no ir á demarcar estas secciones en lugares que den motivo á cuestiones ó dudas.

No tiene interés en esta anticipacion porque es el Congreso quien tiene, en definitiva, que fijar las líneas divisorias entre la Nacion y las provincias.

Sr. Ortiz—Por eso observaba que no podia hallarse en lo que propongo perjuicio de ningun género.

Decia simplemente: me basta la declaracion del señor Ministro, ó que se consigne en la ley, si el señor ministro no quiere hacer esta declaracion, que ella no se estiende á los territorios que estan en disputa.

Sr. Ministro del Interior—Pero si no hay ninguno en cuestion!

Sr. Ortiz—Quiero decir, que estan en discusion.

Sr. Ministro del Interior—Pero si no hay ninguno en discusion tampoco!

Sr. Ortiz—Lo que deseo, señor Ministro, es evitar que se entienda que por esta ley el Congreso ha comprendido que territorios nacionales son todos aquellos que el Poder Ejecutivo considere de tal caracter.

Sr. Figueroa (F. C.)—No puede ser eso. La ley de 1882 manda *vender*, y por esta ley autorizamos la *donacion* de esas tierras.

De manera que nada tiene que ver aquí lo que dice el señor diputado.

Sr. Ortiz—Voy á continuar, señor presidente.

Como he dicho, yo deposito en el Poder Ejecutivo toda la confianza que merece; confio en la simple declaracion que haga el señor Ministro y por eso deseo oírsele.

Pero el señor Ministro se niega á hacerla, y entonces yo digo: si el actual señor Ministro merece toda nuestra confianza, mañana puede venir otro que no la merezca: como puede venir otro Presidente que tampoco sea merecedor de ella.

Sobre todo, señor, en este caso bien se puede aplicar al Gobierno Nacional aquello de *Ego nominor Leo*.

Temo que un acto del Poder Ejecutivo, realizado en un territorio mas ó menos importante, no pueda ser contrareestado por una provincia, á pesar del buen derecho que esta tenga.

Por eso no quiero que se establezca en una ley, algo que importe siquiera la posibilidad de perjudicar los derechos, buenos ó malos, que las provincias crean tener á un territorio dado.

La verdad es esta: que si en un territorio desierto cualquiera se ponen dos regimientos de línea, se lleva pobladores costeados por la Nacion, y esta toma posesion de ese territorio, la provincia que alegue derechos á él los pierde, ó por lo menos, corre riesgo de perderlos, aun cuando en definitiva queda siempre al Congreso la facultad de resolver la cuestion.

Este es un hecho muy posible, y yo deseo que no se realice, cumpliendo con mi deber como diputado por la provincia de Salta.

Puede ocasionarse conflictos constitucionales entre la Nacion y les Provincias sobre ciertos puntos del Chaco que abrazan una estension de cien leguas, no de una legua, como decia el señor Diputado.

Ahora bien, si lo que yo propongo perjudicase de cualquier modo al objeto de esta ley ó hiriese, directa ó indirectamente á los intereses nacionales, comprenderia que no se aceptase mi indicacion; pero siendo una cosa tan racional, tan justa, que no violenta los fines benéficos de esta ley, que no afecta tampoco los derechos ó conveniencias mismas de la Nacion, me parece que es ahora muy necesaria la declaracion que he pedido al Sr. Ministro:

¿Encuentra el Sr. Ministro que mi proposicion afecta directa ó indirectamente, las conveniencias de la Nacion?

Sr. Ministro del Interior.—Pido la palabra. No encuentro que tenga ningun inconveniente lo que el Sr. Diputado indica, pero no le encuentro colocacion en la ley.

Sr. Ortiz.—Entonces haga la declaracion que le pido.

Sr. Ministro del Interior.—El proyecto empieza por decir: «De las tierras nacionales». ¿Qué son tierras nacionales?

Aquellas que están definitivamente puestas fuera de los límites de las provincias, por ejemplo, las que están al Sud de la línea trazada el año 78.

Queda un territorio nacional, el del Chaco, que, efectivamente, no está delimitado en la parte que toca con las provincias de Santiago y Salta.

Pero entonces vuelvo á observar al señor diputado: por lo mismo que el artículo dice: «De las tierras nacionales», es claro que el Poder Ejecutivo no puede proyectar la division sino en aquella parte que está fuera de toda duda, fuera de toda cuestion.

Sr. Ortiz.—Con esa declaracion quedo conforme, señor Ministro.

Sr. Calvo.—Pido la palabra.

Como miembro de la Comision que ha despachado este asunto, me encuentro en el deber de explicar el sentido que ella ha dado á este artículo.

Al aceptar la Comision el artículo del Po-

der Ejecutivo que dice: «De las tierras nacionales que deben ser medidas con arreglo á la ley» etc., ha comprendido perfectamente que no se trataba de tierras litigiosas.

Tierras nacionales, son las palabras del artículo, y las mismas palabras en sí esplican todo, quiere decir: aquellas tierras que pertenecen á la Nacion de una manera indiscutible.

Por consiguiente, la redaccion que ha aceptado la Comision es perfectamente clara y precisa.

En cuanto á la declaracion que pudiera hacer sobre el sentido de esta ley el señor Ministro, permítame mi honorable amigo el señor Diputado por Salta, le diga que la declaracion de un ministro en este caso, no sirve de nada.

Son las resoluciones del Congreso, las únicas que valen, porque desde que esto es materia de una ley, es el Congreso quien la hace á su parecer y no el señor Ministro.

Así es que la declaracion que hiciera el señor Ministro, solo podria servir en cuanto espresara la opinion del Poder Ejecutivo sobre la inteligencia que diera hoy á esta ley, pero de ninguna manera podria tener valor para el futuro como su interpretacion auténtica, por que el Congreso siempre podria introducirle las modificaciones que quisiera al sancionarla.

Sr. Ortiz.—Si se la modificara en el sentido de que he hablado, me opondria.

Sr. Calvo.—Voy á demostrarle al señor diputado, que en este caso el proyecto de la Comision está perfectamente de acuerdo con sus peseos.

Sr. Ortiz.—No es difícil.

Sr. Calvo.—Entonces, es redundante su observacion.

Pedir al señor Ministro que dé la esplicacion de esta ley, no es lo correcto, á mi juicio.

La esplicacion de la ley está en su mismo testo.

Sr. Ortiz.—La Comision ya se habia manifestado conforme conmigo, y por eso mismo deseaba la declaracion del señor Ministro.

Sr. Calvo.—Pero el señor diputado sabe que es el Congreso quien hace las leyes, y que por consiguiente, lo que en este artículo diga la Cámara, de la manera tan clara, perentoria é indiscutible que lo dice ahora la Comision, eso será lo que el Poder Ejecutivo cumplirá sin observacion alguna.

Si la ley dice *tierras nacionales*, el Poder Ejecutivo nunca podrá tocar para nada las que son *litigiosas*, es decir, no nacionales todavía.

Me parece que esto basta.

— Lo son igualmente el segundo y el tercero.

— Se pone en discusion el 4º y dice el

Sr. Gil—Como la ley es un poco estensa, podia tomarse el sistema de dar por aprobado el artículo que no fuera observado.

Sr. Presidente—Si no hay oposicion á la indicacion del señor diputado, así se hará.

— Se aprueban sin observacion los artículos 4º y 5º.

— Se lee el 6º.

Sr. Figueroa (F. C.)—Pido la palabra.

Es para manifestar las modificaciones que ha hecho la Comision en este artículo: ella ha querido ser mas liberal que el Poder Ejecutivo.

Entre las condiciones que imponia el Poder Ejecutivo, estaba la obligacion de cultivar cincuenta hectáreas.

A la Comision le ha parecido excesivo este número y lo ha rebajado á diez.

Existia tambien la obligacion de plantar trescientos árboles, y la Comision los ha rebajado á cien.

Se establecia tambien que el adquirente deberia ser mayor de veinte y dos años y jefe de familia.

La Comision ha creido conveniente suprimir esta última parte. Basta que sea mayor de veinte y dos años.

Estas son las modificaciones que ha hecho la Comision.

Sr. Demaria—Pido la palabra.

Me parece que debe modificarse la redaccion del inciso 3º de este artículo 6º, de manera que se entienda que continuarán en la posesion de sus derechos los sucesores del solicitante, si muere antes de los cinco años; porque, en la forma en que está redactado, si muere antes de esa época sus herederos pierden su derecho, y creo que lo justo seria que continuasen con él, siempre que permaneciesen en la posesion del terreno.

Sr. Ministro del Interior—No hay duda que esa es la mente de la Comision.

Si presenta duda, puede modificarse. Por mi parte, no la tengo.

Sr. Gallo (D.)—Quitando la palabra directamente...

Sr. Ministro del Interior—No. Precisamente es la palabra que menos puede suprimirse.

El Poder Ejecutivo, al ponerla, lo ha hecho para evitar que otras personas se valgan de individuos que vayan á acapar las tierras para ellos, lo que contrariaria el objeto de la ley.

Sr. Demaria—Me parece que quedaria mas claro, no modificando este inciso, sinó agregando otro, que dijera: «Los herederos del

solicitante continuaran en el ejercicio de su derecho, si mantuviesen las condiciones de la ley».

Sr. Ministro del Interior—La indicacion del señor diputado, si se cree necesaria, podria establecerse mejor en el artículo 12: «Vencido el plazo establecido en el artículo 6º, se estenderá el título definitivo de propiedad, debiendo justificar previamente el concesionario ó sus herederos, etc.

Con este agregado quedaria salvada toda la dificultad.

Sr. Figueroa (F. C.)—Mejor quedaria poniendo: «En caso de muerte del solicitante, los herederos continuaran en el goce de su derecho.»

Sr. Calvo—Pido la palabra.

La observacion del señor diputado por Buenos Aires me parece exacta.

Lo contrario seria obligar al solicitante al compromiso de vivir cinco años, de no morirse antes.

Por consiguiente, encuentro esa observacion muy atendible; y propongo, no como miembro de la Comision, sino como simple diputado, la siguiente modificacion: «Aceptará la obligacion de ocupar directamente por sí ó por sus herederos, etc.»

Un señor diputado—No puede obligarse á los herederos á llenar las condiciones de la concesion.

Sr. Gil—Pido la palabra.

Votaré en contra de cualquier modificacion.

Creo que la redaccion del artículo no se presta á duda alguna. Es un principio de jurisprudencia civil inconcuso lo que pretende consignar el señor diputado Demaria.

Por consiguiente, seria supérfluo consignarlo, y quizá su consignacion suscitara dudas, porque seria una especie de noticia que pondriamos en la ley, de que los sucesores van á continuar en el goce del derecho que la ley ha acordado al causante.

Esto es un principio absoluto, en materia de herencias.

Sr. Demaria—Yo bien sabia que todo el que muere traslada sus derechos á la persona que legalmente le sucede.

Pero no sabia lo que el señor diputado nos acaba de decir, y es que, cuando la ley concede directa y esclusivamente un derecho á una persona, sus herederos tambien lo obtengan.

Sr. Gil—Si no se hace una escepcion expresiva, claro que sí.

Sr. Demaria—Es este un derecho personal, y tan personal, que los términos del artículo no dejan lugar á duda: Aceptará la obligacion de ocupar directamente el terreno durante cinco años, etc.

Esto quiere decir que la persona que lo solicite tiene el derecho, él exclusivamente, al terreno, si lo ocupa durante cinco años, porque si no llena este compromiso, lo pierde.

Este no es un derecho que se sucede.

Por eso queria que espresamente se dijera que tendrán opcion áél los que legítimamente le sucedan; porque sino, no la tendrán, á pesar del principio general que cita el señor diputado, y que es para otros casos.

Sr. Gil.—*Directamente* significa que el solicitante no debe ocupar el terreno por medio de terceros; que no puede ser un hombre rico quien adquiera esas tierras por intermedio de encargados que llenen las condiciones de la ley.

Sr. Demaria.—*Directamente* quiere decir que el solicitante, *esclusivamente*, sea quien ocupe el terreno, y no por medio de representantes, como serian sus sucesores.

Sr. Gil.—El sucesor es la misma persona del solicitante; es su continuacion.

Lo que la ley quiere es que el adquirente no sea un hombre acomodado, un patron, que tenga sus capataces ó mayordomos para ocupar el terreno.

La ley civil, hace escepciones especialísimas, al declarar cuales son aquellos derechos puramente personales, que no se trasmiten á los herederos; y, en este caso, habria que establecerlo espresamente, porque sinó, tendrá que seguir la regla general.

Sr. Argento.—Voy á proponer una adicion, análoga á las que se han propuesto, y que creo que salvará todos los inconvenientes: «Aceptará la obligacion de ocupar directamente, por sí ó por sus herederos, en caso de muerte, el terreno, etc.»

Un señor Diputado.—Ya no es directamente, entonces.

Sr. Figueroa (Fr J.).—Pido la palabra.

El pensamiento de la Comision está claramente espresado en el artículo, como lo decia el señor diputado don Córdoba. Pero desde que se suscitan dudas por algunos señores diputados, creo que puede aplicarse el principio aquel, de que lo que abunda no daña.

Sin embargo, no creo que deba aceptarse la modificacion que propone el señor diputado por Santa-Fé, porque, como se observa, los herederos pueden no querer continuar las obligaciones de su causante.

Sr. Ministro del Interior.—Yo he manifestado que no creía necesario adicionar el artículo; y ahora lo creo menos necesario, despues que la discusion deja establecida su inteligencia.

Pero, si se insiste en adicionarlo, creo que lo mas correcto seria, como dije ya, hacerlo en el artículo 12: «Vencido el plazo estable-

cido en el artículo 6º, se estenderá el título definitivo de propiedad, debiendo justificar previamente el concesionario, ó sus herederos, etc.

Sr. Gallo (D.).—Entonces; el *directamente* del inciso 3º, queda perfectamente inútil, porque no habria posesion directa cuando fuera hecha, por una parte, por el causante, y por la otra, por los herederos.

Sr. Ministro del Interior.—Esa palabra tiene otro alcance.

Sr. Gallo (D.).—Lo comprendo; pero quedaria impropia la redaccion de la ley.

Me parece muy aceptable la indicacion del señor diputado por Santa-Fé: «Aceptará la obligacion de ocupar directamente, por sí ó por sus herederos, el terreno durante cinco años, etc.»

Se observa en contra de esta indicacion que importa obligar á los herederos á aceptar una estipulacion hecha por el causante.

Me parece que esta observacion no resiste al mas ligero exámen.

El causante puede, perfectamente, establecer las condiciones que quiera, en un contrato, con cualquier persona, y los herederos estan en la obligacion, si aceptan la herencia, de cumplirlas. Por consiguiente en este caso, si los herederos quieren continuar con la concesion del gobierno, tienen que aceptar las condiciones establecidas, y si no las cumplen, pierden el derecho á la concesion.

Me parece que, con esta simple modificacion, queda todo perfectamente salvado: el propósito del Poder Ejecutivo, de que no se adquirieran estos terrenos por medio de tercero, y el del señor diputado Demaria, de que tengan derecho á la concesion los herederos del adquirente.

Sr. Navarro Viola.—Pido la palabra.

Al principio, dice el artículo: «El Poder Ejecutivo concederá la posesion de un lote á todo ciudadano ó extranjero que tenga carta de ciudadanía.»

Estas últimas palabras estan demás. El extranjero que obtiene carta de ciudadanía, es ciudadano.

Sr. Ministro del Interior.—Es cierto; pero voy á darle la razon porque se ha redactado en esa forma.

Esta es una ley que está llamada á circular en puntos distantes, en el extranjero y en la campaña, donde no es bien conocida la acepcion de las palabras, el significado de las frases; y, entonces, hemos deseado redactarla de una manera clara, á fin de que puedan comprenderla fácilmente todos los que quieran acogerse á ella.

Por esta misma razon no quisimos poner *extranjeros nacionalizados*.

Por lo demas, hemos convenido en que los

términos de la ley no son los mas técnicos ó apropiados.

Sr. Navarro Viola—¿No bastaria poner *ciudadano natural ó legal*?

Sr. Ministro del Interior—Precisamente es lo que digo al señor diputado. Habria sido mas regular alguna de esas formas; pero ha mediado la razon que dejo indicada.

Sr. Navarro Viola—Bien; yo no insistiré.

Sin embargo, me parece que ante todo, debe atenderse á la correccion del lenguaje.

Todo aquel que se interese en los beneficios de la ley, ha de buscar quien se la explique bien.

Sr. Argento—¿No seria bueno poner *ciudadano natural ó naturalizado*?

Sr. Navarro Viola—Precisamente, eso es lo que yo decia. Parece que es mas correcto y el señor Ministro lo cree tambien así.

Sr. Argento—Ya se sabe que el que es naturalizado es extranjero, y así se logra el objeto del señor Ministro.

Sr. Malbran—Que se vote el artículo tal como ha sido despachado por la Comision, y en caso de ser rechazado vendrá la modificacion.

Sr. Presidente—Si algunos señores diputados solicitan que se vote por partes el artículo, así se hará. Se votará todo el artículo tal cual ha sido aceptado por la Comision.

Igualmente, si algun señor diputado exigiere una votacion especial sobre el inciso 3º de este artículo, sobre el cual se ha propuesto una modificacion por el señor diputado por Santa-Fé, con asentimiento, al parecer, de algunos miembros de la Comision, puede hacerse.

Sr. Demaria—La Comision ha aceptado la modificacion.

Sr. Presidente—Perfectamente por eso ha esta observacion.

Sr. Demaria—Se podria votar con la modificacion, entonces.

Sr. Presidente—Observaré al señor diputado que uno de los miembros de la Comision solicita que se vote el despacho tal como ha venido de la Comision.

Sr. Malbran—Que se vote el artículo tal como está en la órden del dia.

— Se vota el artículo y es rechazado.

Sr. Presidente—Parece que no hay propuesta ninguna modificacion en los incisos 1º y 2º. Así es que se votará el inciso 3º con la modificacion propuesta por el señor diputado por Santa-Fé.

Sr. Navarro Viola—Parece que el resultado de la votacion anterior es que no puede dejarse una incorreccion en la ley.

Decir: «extranjero que tiene carta de ciu-

dadania» no es correcto; ciudadano natural ó legal, ó simplemente ciudadano, debe decir.

Sr. Presidente—Se va á votar la primera parte del artículo tal cual ha sido despachado por la Comision.

Sr. Olmedo—Eso no se puede votar.

Sr. Presidente—Lo q' he puesto á votacion anteriormente ha sido todo el artículo con sus diversos incisos; ha sido rechazado, y como la mente de los señores diputados al rechazar el artículo pudo haber sido rechazar la forma del inciso 3º y no la primera parte del artículo ponía á votacion el inciso 3º. Pero una vez que se quiere modificar la primera parte del artículo recaerá una votacion sobre ella; si fuese rechazada se pondrá á votacion la modificacion propuesta por el señor diputado.

— Se vota la 1ª parte del artículo 6º en la forma propuesta por la Comision y es aprobada.

Sr. Olmedo—Pido que se rectifique la votacion.

— Se rectifica y da el mismo resultado.

— Se aprueba los incisos 1º y 2º. Se rechaza el inciso 3º en la forma propuesta por la Comision, y se aprueba en la siguiente forma: «Aceptará la obligacion de ocupar directamente el terreno *por sí ó sus herederos*, en caso de muerte, durante cinco años continuos, etc.»

— El inciso 4º es tambien aprobado.

— Lo son igualmente los artículos 7º, 8º, 9º, y 10º.

— En discusion el 11º.

Sr. Ortiz—Pido la palabra.

Desearia que se votara el artículo propuesto por el Poder Ejecutivo porque me parece mas conveniente.

En el de la Comision se fija un año de plazo para anular esos actos fraudulentos, y en el del Poder Ejecutivo no se fija plazo alguno.

Creo que no debe fijarse ningun plazo.

Sr. Figueroa (F. C.)—La Comision ha estado muy dividida en este sentido.

Predominó en su seno la idea general de que no podia dejarse indeterminada la propiedad, para sujetar á los terceros poseedores á las consecuencias de pleitos que pudieran suscitarse, y, con este motivo, nacieron dos ideas. La una que debia fijarse el plazo de un año y la otra que debia decirse: antes de que hubiese pasado la tierra á un tercer poseedor.

Hemos creido mas conveniente fijar el plazo de un año, porque tal como proponia este artículo el Poder Ejecutivo, nos parecia impropio.

El artículo del Poder Ejecutivo dice: «Si se descubriesen actos ejecutados para eludir las

disposiciones de esta ley, el Poder Ejecutivo, en cualquier tiempo, declarará revocado el derecho acordado, etc.»

De manera que no hay limitacion ninguna de tiempo para que los terceros poseedores estén garantidos.

¿Porque razon á de sufrir el tercer poseedor las consecuencias de un pleito, cuando él ha adquirido *bonna fide* la cosa?

Indudablemente no es justo que quede indeterminada la propiedad.

Sr. Calvo—Pido la palabra.

Como ha dicho el honorable miembro informante de la Comision, esta ha estado sumamente dividida sobre este punto; y yo declaro humildemente, que persisto en la opinion que allí sostuve.

A mi entender decir *en cualquier tiempo*, es monstruoso.

«Si se descubriesen actos ejecutados para eludir las disposiciones de esta ley, el Poder Ejecutivo *en cualquier tiempo* declarará revocado el derecho etc.»

Esto es lo mismo que promulgar el derecho de confiscacion futura posible.

Como se comprende: decir *en cualquier tiempo* declarará revocado el derecho acordado, es enorme, es absurdo, es monstruoso, no tiene explicacion.

La Comision estaba indecisa, como acaba de manifestar el señor miembro informante, respecto á la aceptacion del adverbio *cualquier*.

Ahora, en cuanto á que el fraude se castigue antes de otorgar los títulos, antes de pasar á poder de tercero, de manera que la propiedad quede libre y pueda marchar segura una vez que los títulos estén acordados, se comprende.

Pero despues de acordados los títulos, que constituyen la propiedad perfecta, dejar en perspectiva un gravámen tan terrible como la posibilidad de que se descubra ó se invente algun fraude despues de treinta ó mas años,—es algo que no tiene explicacion posible.

Si esta disposicion subsiste, tal vez esas propiedades no se venderan jamás.

¿Quien las va á adquirir en esas condiciones?

Es inútil y completamente contraproducente consignar en la ley una disposicion de esta especie, porque es seguro que no habrá propietarios, es decir....

Sr. Figueroa (F. J.)—Eso es matar la ley.

Sr. Calvo—Perfectamente, eso es matar la ley; tiene razon el señor diputado.

Sr. Ortiz—La inteligencia dada por el Poder Ejecutivo á ese artículo, no puede ser otra sinó la de que las nulidades que subsistan sean aquellas establecidas por las leyes generales, es decir, que el fraude desaparecerá en aque-

llos casos en que la ley general civil lo hace desaparecer.

Pero en este artículo se hace una escepcion á la ley general sobre el fraude, y se limita la nulidad al término de un año, lo que es hacer ineficaz, hasta cierto punto, la condenacion del fraude.

Sr. Calvo—A mi entender, mi honorable amigo está equivocado.

El artículo dice:

«Si se descubriesen actos ejecutados para eludir las disposiciones de esta ley, el Poder Ejecutivo (no dice, ni siquiera, el Poder Judicial) en cualquier tiempo declarará revocado el derecho acordado, volviendo la tierra, con todo lo edificado y plantado en ella, al dominio de la Nacion».

Esto es lo que yo califico de monstruoso.

Sr. Ortiz—Puede decirse, *con arreglo á la ley general*.

Sr. Calvo—Permítame.

Eso no puede ni decirse, cuando el testo es espreso, y deliberadamente dice: *en cualquier tiempo*, lo que es una escepcion á las leyes generales.

En cualquier tiempo tiene facultad el Poder Ejecutivo para revocar el título.

Por consiguiente ni el Poder Judicial puede entender en la cuestion.

Si á los diez años se prueba un fraude que consista, por ejemplo, en el olvido de una formalidad, yo declaro que no puede haber propiedad segura de esta manera, porque siempre habria *en cualquier tiempo* la facilidad de pretestar, un fraude que, tal vez, no ha tenido lugar jamás.

Hay que tener en cuenta, tambien, que esto sale de nuestras leyes, porque son cuestiones á deslindarse por el Poder Judicial, exclusivamente por él.

Por este artículo, el Poder Ejecutivo puede, levantando una sumaria informacion, quitar las tierras al poseedor siempre que se haya justificado un fraude, es decir, una omision; lo que es equivalente á una confiscacion mas ó menos justificada.

Esto no quiere decir que el Poder Ejecutivo vaya á proceder así, pero esponemos la propiedad privada á todas estas dificultades y á todos estos peligros.

Propongo, pues, á la Comision y al señor Ministro se sirvan adoptar cualquier otro temperamento, alguna otra redaccion que salve los inconvenientes que he apuntado.

Por ejemplo, podria decirse: si se descubriesen actos ejecutados para eludir las disposiciones de esta ley *antes* de otorgarse los títulos ó *antes* de pasar á tercero, etc., etc.

Una vez que estos títulos de propiedad estén otorgados, es necesario dejar transferir y

marchar esta propiedad con toda la latitud de otra cualquiera y sin inconvenientes de ningun género.

Este es mi punto de vista.

Sr. Ministro del Interior—Pido la palabra.

Recuerdo que en el seno de la Comision llamé la atencion de los señores que la forman sobre este artículo, con el objeto de que quedase bien claro este punto.

La idea del Poder Ejecutivo era que en cualquier tiempo se revocara el derecho acordado, mientras la tierra permaneciese en poder del concesionario, ó de sus sucesores.

Los señores de la Comision tomaron en consideracion esta observacion, y discutieron detenidamente este punto....

Sr. Calvo—Es exacto.

Sr. Ministro del Interior—.....y me parece que concluyeron por proponer una modificacion á este respecto....

Sr. Calvo—Concluimos por que cada uno se fuera á su casa. No pudimos ponernos de acuerdo.

Sr. Ministro del Interior—.....que encuentro en la primera página: «*hasta un año despues de otorgado el título.*»

No tengo inconveniente en aceptar esta modificacion.

Sr. Gil—Es lo mismo que deseaba el señor diputado por la Capital.

Sr. Calvo—Yo decia, *antes de otorgado.*

Sr. Argentó—Pido la palabra.

La idea de la Comision ha sido evitar que se eludiera la disposicion legal vendiendo el bien raiz, inmediatamente despues de obtenido el título.

Entonces la Comision, colocándose en un término medio entre las observaciones del señor Calvo, que se oponia al señalamiento de término y la fijacion indeterminada de tiempo, que establecia el proyecto del Poder Ejecutivo, resolvió establecer el de un año, para conseguir, por este medio, entre otras cosas, que los pleitos tuvieran fin.

De manera, pues, que una vez vencido el año, si el Poder Ejecutivo no descubriera que habia habido fraude, quedaría bien transmitida la propiedad y no habria derecho ni para ir á los tribunales.

Es preciso dar al Poder Ejecutivo algun tiempo para que, si vencidos los cinco años, se descubriese que habia habido fraude, tuviera algun derecho y no se eludiera completamente las disposiciones de esta ley.

Por esta razon es que la Comision ha establecido el término de un año.

Sr. Figueroa (F. C.)—Es preciso que nos demos cuenta exacta de las dos ideas que se han espuesto.

El señor Calvo propone la supresion com-

pleta de este artículo, ó lo que es lo mismo, la supresion del término de un año.

El señor diputado por Salta quiere la subsistencia del artículo, tal como lo propone el Poder Ejecutivo.

La idea del señor Calvo es que, una vez otorgado el título, no puede revocarse por razon de fraude, porque es dejar indeciso el derecho de propiedad, adquirido por el otorgamiento del título.

Sr. Calvo—Eso es.

Sr. Figueroa (F. C.)—La Comision creyó que debia castigarse el fraude descubierto durante el año siguiente del otorgamiento del título, el cual se otorga una vez que se hayan llenado las condiciones que la ley establece.

Porque podria haber fraude; podrá adquirir una persona á nombre de otra, acaparando así gran cantidad de tierra, y saberse esto despues de otorgado el título.

Se propuso tambien la idea que pudiera revocarse el título antes de que pasara á tercer poseedor, á fin de no castigar á este, que puede ser de buena fé.

En vista de estas ideas diferentes, se resolvió, como transaccion, fijar un plazo corto; y quedó establecido que un año despues de producido el fraude, ya no podria revocarse el derecho acordado.

Suprimir completamente y desde el primer momento todo castigo, no me parece conveniente, y así lo ha creído tambien la Comision, puesto que el título de propiedad se otorga despues de cinco años y que puede haber fraude.

Me parece que el temperamento que la Comision propone es el mejor, porque de esta manera se obsta al acaparamiento de la propiedad. Y, por otra parte, debe fijarse un término despues del cual no se puede revocar el título mal adquirido, porque hasta las mismas cosas que se adquieren por robo se prescriben.

He dicho.

Sr. Ortiz—Pido la palabra.

Aunque he sido un poco pesado á la Cámara, y á pesar de que veo que muchos colegas estan poco dispuestos á oirme, creo de mi estricto deber llamar la atencion sobre la importancia de este asunto....

Sr. Olmedo—¿Me permite que lo interrumpa? Es para hacer una mocion prévia.

Sr. Ortiz—Es muy temprano!

Y tal vez mis observaciones darian lugar á que los señores diputados meditaran un poco...

Sr. Olmedo—Por esta misma razon, porque seria mejor meditar despacio, mejor haríamos en levantar la sesion.

Sr. Ortiz—Voy á decir únicamente dos palabras.

Sr. Olmedo—Ha de ser estenso.

Sr. Ortiz—No, señor.

Decía que este artículo es de importancia, por esta sencilla razón: según lo poco que conozco en materia de leyes de tierras públicas, y aun en la práctica nuestra, uno de los grandes inconvenientes que han encontrado las autoridades, para reglamentar la distribución de la tierra pública, es precisamente la facilidad que ofrecen los medios fraudulentos, (que en gran número existen siempre, en la práctica) para desvirtuar los propósitos de la ley, permitiendo la acumulación de muchas propiedades en manos de los grandes capitalistas.

El objeto de la distribución de la tierra es, según lo ha dicho el señor miembro informante de la Comisión, (y no tienen mas objeto todas las leyes conocidas sobre esto; y esta es una ley especial para los pobres,) es entregar un pedazo de tierra á aquellos individuos que lo necesitan, que lo puedan cultivar, poblando al mismo tiempo por este medio el territorio. Pero si de cualquier modo se deja en esta ley la posibilidad de un fraude, téngase presente que ella no va á ser ley del hogar, sinó motivo de una gran especulación.

Yo había entendido, oyendo al señor miembro informante de la Comisión, que el objeto que se tenía en vista, al establecer el artículo en esos términos, era de declarar que los actos de fraude, serían anulables mientras no mediara la prescripción con arreglo á la ley común.

El fraude, en todos los actos civiles que son anulables y perfectamente iguales á este, se prescribe por cinco, diez, quince, veinte y treinta años.

Entonces, ¿porque llama esto la atención de los señores diputados?

La cuestión no es que la medida sea extraordinaria, sinó si conviene, en el caso actual, estar á los términos de la ley civil, ó por el contrario, si conviene disminuirlos ó aumentarlos.

Yo entiendo, señor Presidente, que tratándose en esta ley del hogar, como se llama, de la distribución de tierras, con el objeto de poblar las fronteras, ella debe ser muy previosora y muy detallada, para evitar que una ley que tiene un objeto tan benéfico sea trasformada en una ley de verdadera especulación.

Creo pues que si la Cámara no acepta la extensión del término relativo al acto fraudulento, no va á ser tal ley del hogar, porque las tierras van á ser dadas á los grandes especuladores.

Por esto llamo la atención de la Cámara.

Yo creo que si no se puede estar á los términos generales establecidos en la ley civil, debe fijarse un término mucho mas largo que el que se propone, quince ó veinte años, si se quiere, para hacer que esta ley sea benéfica y realmente eficiente á los efectos que con ella se buscan.

Así es que yo haría moción para que se reductase el artículo en este sentido; que se pueda anular estos actos mientras ellos sean anulables por la ley civil, es decir, tomándose los términos fijados por esta ley.

Sr. Olmedo—Pido la palabra.

Hago moción para que se levante la sesión.

—Suficientemente apoyada esta moción se vota, y resulta aprobada.

—Se levanta la sesión, siendo las 5 y 50 p. m.